

Santiago, diez de agosto de dos mil veintitrés.

VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que ha comparecido ante este Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, don SERGIO FERNANDO GAJARDO AREVALO, administrador de condominios, cedula de Identidad N° 9.354.183-9, representante de Puntoriente Ltda, Rut: 76.451.835-7, persona jurídica que administra la Comunidad Edificio don Roberto, Rut 53.304.862-5, giro condominio, domiciliados para estos efectos en calle Diego de Almagro N° 2305, comuna de Providencia, Santiago, interponiendo reclamo conforme al artículo 503 del Código del Trabajo, en contra de la INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO PROVIDENCIA, representada por doña DANIELA ANDREA ALLENDE MUÑOZ, Inspectora Comunal del Trabajo, ambas domiciliadas en Avda. Providencia n° 1275, Comuna de Providencia, Santiago.

Expone que su representada fue notificada de la resolución de multa No. 1528/23/3, dictada el día 23 de enero de 2023, por la Inspección Comunal del Trabajo Providencia. Dicha resolución se emitió como consecuencia de la fiscalización llevada a cabo por el fiscalizador respectivo que constató la siguiente infracción: “NO EXHIBIR TODA LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA QUE DERIVA DE LAS RELACIONES DE TRABAJO, NECESARIA PARA EFECTUAR LAS LABORES DE FISCALIZACIÓN, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: COMPROBANTES DE DEPÓSITOS, TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE PAGO DE LAS REMUNERACIONES DESDE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2022. LO ANTERIOR, RESPECTO DE



LA TRABAJADORA SOL MARCHAN SANTELICES, RUT:
26.303.360.4”.

Indica que los documentos solicitados no existen y nunca existieron debido a dos razones; en primer lugar, la trabajadora se encuentra con licencia médica prolongada desde febrero de 2022 y hasta la fecha y no ha vuelto a trabajar en la Comunidad. Indica que es imposible exhibir comprobantes de depósito o transferencia de pago de remuneraciones debido a la situación descrita ya que no existe obligación legal de pagar mientras la trabajadora se encuentre con licencia médica prolongada, mes a mes, atendido lo cual no hay pago de remuneraciones por parte de la comunidad y es la entidad previsional de salud respectiva la que paga la licencia médica hasta la fecha.

En segundo lugar, señala que es imposible entregar la documentación solicitada, esto es, transferencias o comprobantes de depósito de remuneraciones en atención a que la comunidad paga a sus trabajadores con cheque y que lo que debió solicitarse son comprobantes de pago de remuneraciones. Además, indica que en atención a la inasistencia de la trabajadora por licencia médica es imposible que se hubiese emitido un solo cheque a la señora Sol Marchan en pago de remuneraciones.

Agrega que al no haberse indagado en forma correcta la situación de la trabajadora, se solicitaron erróneamente documentos que no existen y que inciden en que la multa se encuentra mal fundamentada.



En subsidio solicita que la multa sea declarada como mal tipificada y sea rebajada prudencialmente al carecer de toda razonabilidad. Indica que la correcta tipificación es la establecida en el tipificador de multas de la inspección del trabajo, código 1046-c, página 46, esto es, “No entregar comprobante de pago de remuneraciones o entregar sin las indicaciones legales”, por ende, no existe ni existía la obligación de entregar comprobante de pago de remuneraciones debido a la prolongada licencia médica de la trabajadora. Agrega que su representada es una comunidad con solo seis trabajadores, con un presupuesto bajísimo, a la cual se le impone una multa que es totalmente desproporcionada y que la legislación laboral regula las multas de acuerdo a la cantidad de trabajadores que tiene la empresa, encontrándose su representada en el rango más bajo con solo tres trabajadores.

Finalmente, en subsidio solicita que la multa sea rebajada prudencialmente, al carecer de toda razonabilidad. Indica que dentro del tipificador de multas de la Inspección del Trabajo, se le aplica el código 1237-a, el cual establece tres escalas en los montos de las multas, leve, grave y gravísima, que a su representada se le aplica dentro de la escala la multa más alta, al considerarse gravísima, lo cual no es razonable y es totalmente desproporcionada, siendo una Comunidad de Copropietarios que tiene solo tres trabajadores, y que la multa se refiere a documentación de solo uno de ellos. Agrega que su representada jamás ha sido multada con anterioridad por la Inspección del Trabajo, tiene una conducta anterior irreprochable y



que jamás ha sido demandada por trabajador alguno. Refiere a que la actuación de la Inspección del Trabajo resulta excesiva, con errores de hecho manifiestos, carece de fundamentación suficiente, ha violado el principio de tipicidad y, en definitiva, adolece de la racionalidad que debe servir de fundamento para todo acto jurídico conforme los principios de la ley 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. Indica que, no se vislumbra una motivación válida y razonable que justifique tal multa, la cual a lo menos debieran ser rebajadas al mínimo.

En cuanto a las peticiones concretas pide que se acoja el reclamo y que las multas cursadas sean dejadas sin efecto, o en subsidio rebajadas, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que la reclamada contestó el reclamo judicial solicitando su completo rechazo, con expresa condenación en costas. Expone que la fiscalización de autos se origina producto de una denuncia efectuada por una trabajadora, señalando que el empleador desde el mes de febrero de 2022, no ha pagado la asignación familiar correspondiente a sus dos hijas. Indica que se efectuó una fiscalización con el objeto de verificar la efectividad de los hechos denunciados, entrevistándose la fiscalizadora con don Sergio Guajardo administrativo de la comunidad, a quien se le requirió de documental necesaria la cual no fue exhibida de forma completa.



Señala que de los documentos que si fueron aportados por la parte empleadora, se constató que la trabajadora tiene un contrato escriturado y vigente desde el día 01.03.2020 en el cargo de auxiliar de aseo, posteriormente presenta un anexo de contrato de trabajo de fecha 09.06.2021 en que se estipula el cambio de cargo a conserje con jornada de lunes a sábado. Agrega que se verificó que la trabajadora presenta licencias médicas con continuidad desde el 02.02.2022 y que, en relación a la materia denunciada, se observa que en los comprobantes de pago de las remuneraciones, desde febrero de 2022 existe un pago de la asignación familiar de \$13.401.-, posteriormente desde agosto a diciembre de 2022 se observa en dicho ítem un pago de \$32.836 y que el pago de dichos montos no pudo ser verificado toda vez que el empleador no exhibió los comprobantes de pago de depósitos y/o transferencias. De esta forma, al no acompañar la empresa los documentos que den cuenta del pago de la asignación familiar es que no fue posible revisar la materia denunciada y se cursó multa administrativa por no exhibir documentación requerida.

En cuanto a las alegaciones de la reclamante señala que contrario a lo que indica, las asignaciones familiares son de cargo del empleador incluso en los periodos en que la trabajadora cuente con licencia médica y que el problema se genera en cuanto no acredita la parte empleadora haber efectuado el pago de dichos montos a la trabajadora, circunstancia que no pudo ser verificada toda vez que el empleador no exhibió los comprobantes de pago de depósitos y/o transferencias, situación que es concordante con lo denunciado por la



trabajadora en cuanto expresa que desde febrero de 2022 no se ha pagado la asignación familiar correspondiente a sus dos hijas, a pesar que dicho monto aparece reflejado en las liquidaciones de sueldo exhibidas por el condominio.

Respecto de la alegación de que no tendría como acreditar los pagos ya que la comunidad paga con cheques a los trabajadores, dicha argumentación no fue expresada durante la fiscalización y que tampoco adjuntó la empresa los comprobantes de haber emitido dichos cheques a favor de la trabajadora. Indica que, en cuanto a la alegación de falta de fundamentación de la multa, controvierte aquello, puesto que la empresa formó parte del proceso de fiscalización, instancia en la que conoció cuales eran los conceptos fiscalizados denunciados por la trabajadora, por lo que no puede ahora pretender desconocer su participación en dicho proceso.

Agrega que contrario a lo que sustenta la reclamante si se han afectado derechos laborales, se trata de infracciones gravísimas (apropiación de montos aportados por el Estado como son las cargas familiares) que no pudieron ser fiscalizadas y que generan ciertamente un perjuicio para la trabajadora denunciante y que impiden dar cumplimiento al mandato de orden público de efectuar el procedimiento fiscalizador iniciado por la autoridad administrativa llamada a velar por el cumplimiento de la legislación laboral.

Controvierte expresamente que la multa este mal tipificada o que carezca de razonabilidad, o que exista una infracción al principio de proporcionalidad al cursarse, en cuanto se pretende por la reclamante



modificar la tipificación de la infracción. Indica que la multa de autos se encuentra correctamente cursada y no correspondería que fuere rebajada ante la efectividad de los hechos por los cuales fue cursada y al no poder acreditarse la integra corrección posterior respecto de una multa que se genera “in actum” como lo es la por no exhibir documentación, impidiendo con lo anterior el proceso fiscalizatorio, no siendo procedentes las alegaciones de derecho efectuadas, ya que la multa es cursada conforme a la gravedad de la infracción, al número de trabajadores afectados de la muestra (100%), no siendo procedente además una rebaja del monto de la misma en base a un criterio de proporcionalidad, atendido a que el monto aplicado se ajusta plenamente a lo establecido en la ley laboral vigente.

Solicita en definitiva se rechace el reclamo interpuesto en todas sus partes con costas.

TERCERO: Que, con fecha 11 de abril de 2023, se realizó la audiencia preparatoria de autos, en la cual, llamadas las partes a conciliación, esta no se produce. Que, se fijó como hecho no controvertido el siguiente:

1. Existencia de la resolución de multa N° 1528/23/3, de fecha 23 de enero el año 2023.

Que además se fijó como convención probatoria la siguiente:

- Durante el periodo del 02 de febrero del año 2022 al 03 de febrero del año 2023 la trabajadora se encontraba con licencia médica.



Que, se determinó como hechos controvertidos:

1. Efectividad de que se incurrió en un error de hecho por el fiscalizador al cursar la infracción, y los fundamentos de la resolución recurrida.

CUARTO: Que, con fecha 18 de julio de 2023 se llevó a cabo la audiencia de juicio. Que para acreditar sus alegaciones la parte reclamante incorporó en la audiencia de juicio los siguientes medios probatorios que habían sido ofrecidos en la audiencia preparatoria respectiva:

Documental:

1. Copia de la resolución de multas 1528/23/3 emitida por la Inspección Comunal del Trabajo Providencia.

2. LIQUIDACIÓN EGRESOS JUNIO - 2023 Comunidad Edificio Don Roberto.

Confesional: La parte reclamante solicitó la absolución de posiciones del demandado no pudiendo obtener dicho medio, por lo que solicitó se haga efectivo apercibimiento del artículo 454 N° 3 del Código del Trabajo.

Oficios: Se incorpora oficio que había sido solicitado a la Superintendencia de Seguridad Social.

Exhibición de Documentos: La parte reclamante había solicitado a la demandada la exhibición de:



Copia de toda la documentación de fiscalización, que dio origen a la resolución de multas 1528/23/3 emitida por la Inspección Comunal del Trabajo Providencia.

Se tuvo por cumplida la exhibición de documentos solicitada.

Prueba del Tribunal: Se incorpora oficio solicitado a Inspección Comunal del Trabajo de Providencia.

QUINTO: Que, por su parte, la parte reclamada incorporó en la audiencia de juicio los siguientes medios probatorios que habían sido ofrecidos en la audiencia preparatoria respectiva:

Documental:

1. Copia de caratula de fiscalización 1312/2022/2545.
2. Copia de informe de exposición de fiscalización 1312/2022/2545.
3. Copia de activación de fiscalización 1312/2022/2545.
4. Copia de resolución de multa n° 1528/2023/3 y comprobante NCC de correo electrónico informado por la empresa para efectos de notificación que da cuenta que la empresa no cuenta con un correo registrado.
5. Copia de notificación de inicio de procedimiento de fiscalización 1312/2022/2545.
6. Copia de formulario Fi-2 de fiscalización 1312/2022/2545.



7. Copia de acta de notificación de requerimiento de documentación y citación de fecha 04 de enero de 2023.

8. Copia de acta de notificación de requerimiento de documentación y citación de fecha 13 de enero de 2023.

9. Copia de certificado de pago de cotizaciones previsionales de fecha 18 de enero de 2023.

10. Copia de carta certificada de correos de Chile de notificación de la multa de autos junto a guía de despacho de correos de Chile de fecha 03/02/2023.

SEXTO: Que, en primer lugar, se debe tener presente que la acción interpuesta en autos corresponde a una reclamación respecto de la Resolución de Multa N° 1528/23/3, de fecha 23 de enero el año 2023, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 503 del Código del Trabajo. Que entonces a este sentenciador le está permitido, en esta sede, revisar todos los antecedentes y circunstancias que llevan a su imposición por parte del ente fiscalizador.

SEPTIMO: Que, previo a pronunciarse sobre las alegaciones formuladas por la reclamante, conviene dejar constancia que la fiscalización que origina la aplicación de sanciones, se inicia conforme se acredita con la documental acompañada por la reclamada, en especial por el documento de caratula de fiscalización 1312/2022/2545, la copia de informe de exposición de fiscalización 1312/2022/2545 y la copia de activación de fiscalización 1312/2022/2545, mediante la denuncia efectuada por una trabajadora,



quién indicó que su empleador desde el mes de febrero de 2022, no le había pagado la asignación familiar correspondiente a sus dos hijas.

Que así las cosas, se realizó el procedimiento respectivo, asignando a la fiscalizadora doña Nelly Venegas, quien con fecha 04 de enero de 2023 concurrió personalmente a las dependencias de la comunidad Edificio don Roberto, iniciando la fiscalización, procediendo en el lugar a entrevistar al señor Sergio Guajardo, administrativo de la comunidad, a quién se le citó el día 09 de enero de 2023, para posteriormente solicitarle mayor documentación para el día 19 de enero del mismo año, sin que el empleador exhibiera la documentación completa, constatando que en los comprobantes de pago de las remuneraciones que van desde el mes de febrero de 2022, se observa un pago de asignación familiar por el monto de \$13.401.-, posteriormente desde el mes de agosto a diciembre de 2022 se observa por el mismo ítem un pago de \$32.836, pagos que no pudieron ser verificados toda vez que el empleador no exhibió los comprobantes de pago de depósitos y/o transferencias correspondientes.

OCTAVO: Que, de esta forma mediante la Resolución de Multa N° 1528/23/3, de fecha 23 de enero el año 2023, la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia resuelve cursar una multa a la comunidad por; “NO EXHIBIR TODA LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA QUE DERIVA DE LAS RELACIONES DE TRABAJO, NECESARIA PARA EFECTUAR LAS LABORES DE FISCALIZACIÓN, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: COMPROBANTES DE DEPÓSITOS,



TRANSFERENCIAS BANCARIAS DEL PAGO DE LAS REMUNERACIONES DESDE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2022, LO ANTERIOR RESPECTO DE LA TRABAJADORA SOL MARCHAN SANTELICES RUT: 26.303.360-4”.

Que el enunciado de la infracción es; “NO EXHIBIR TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EFECTUAR LAS LABORES DE FISCALIZACIÓN”, mientras que la norma legal infringida de acuerdo a la resolución de multa referida, es la del artículo 31 en relación del artículo 32, ambos del D.F.L N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social que establece que; “Los funcionarios del Trabajo podrán requerir de los empleadores, patrones o de sus representantes y de sus organizaciones, toda la documentación necesaria para efectuar las labores de fiscalización que les corresponda y todos los datos pertinentes para realizar las encuestas que patrocina la Dirección del Trabajo, incluso la exhibición de sus registros contables para su examen. Toda aquella documentación que deriva de las relaciones de trabajo deberá mantenerse en los establecimientos y faenas en que se desarrollen labores y funciones”.

Que, a su vez, el artículo 32 de la misma norma, establece que “La infracción a las disposiciones del artículo precedente será sancionada con multa administrativa de tres sueldos vitales mensuales, escala A) del departamento de Santiago hasta diez sueldos vitales anuales del mismo departamento que será aplicada por el Inspector del Trabajo que la constató”.



Que, además el ente fiscalizador estimó infringida la norma del artículo 8 de la Ley N° 18.018 y el artículo 30 del Decreto Supremo N° 51 de 1982 del Ministerio de Justicia.

NOVENO: Que, en síntesis la reclamante indica que los documentos solicitados no existen y nunca existieron debido a dos razones; en primer lugar, la trabajadora se encontró con licencia médica prolongada desde febrero de 2022 y hasta marzo de 2023 y no ha vuelto a trabajar en la Comunidad, por lo que es imposible exhibir comprobantes de depósito o transferencia de pago de remuneraciones debido a la situación descrita, toda vez que no existe obligación legal de pagar mientras la trabajadora se encuentre con licencia médica prolongada, siendo la entidad previsional de salud respectiva la que debe pagar la licencia médica. Y, en segundo lugar, señala es imposible entregar la documentación solicitada, en atención a que la Comunidad paga a sus trabajadores con cheque y que lo que debió solicitarse son los comprobantes de pago de remuneraciones.

Que esta forma, la parte reclamante reconoce en el libelo que no exhibió los comprobantes de depósito o transferencia bancaria respecto del pago de las remuneraciones de la trabajadora, por consiguiente, es posible determinar que los hechos descritos en la Resolución de Multa configuran la infracción sancionada, siendo por ende ajustada a derecho la multa administrativa aplicada. De tal modo, mal podría estimarse conformado un error de hecho sobre el particular, máxime considerando que la reclamante no rindió prueba alguna en contrario destinada a derribar la conclusión del ente fiscalizador.



Lo que la reclamante debía acreditar en los presentes autos era que había dado cumplimiento a lo prescrito en la norma infringida sancionadora, a saber, los artículos 31 y 32 del DFL N°2 de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, lo que no realizó ante esta sede jurisdiccional, como tampoco en la sede administrativa, resultandos insuficientes las alegaciones de la reclamante para dejar sin efecto esta multa.

DECIMO: Que, por otro lado, la reclamante señala que no existe obligación legal de pagar las remuneraciones mientras la trabajadora se encuentre con licencia médica prolongada, pues es la entidad previsional de salud respectiva la que paga la licencia médica hasta la fecha. Que para acreditar sus alegaciones la parte reclamante incorporó en la audiencia de juicio oficio que había sido solicitado a la Superintendencia de Seguridad Social. Que dicho oficio refiere a la naturaleza jurídica de la asignación familiar, esto es, si constituye o no remuneración, no así respecto de la obligación de la reclamante de exhibir los comprobantes de depósito o transferencia del pago de remuneraciones.

Que, de acuerdo a lo que ha señalado la Superintendencia de Seguridad de Seguridad Social, en el caso de los trabajadores dependientes, la asignación familiar es un subsidio estatal para los trabajadores que debe ser pagada por el empleador durante la licencia médica.

Que entonces, conforme a lo expuesto y verificándose la concurrencia de la infracción, la multa aparece como correctamente



aplicada, lo que lleva al rechazo de la demanda en cuanto se pretendía dejar sin efecto la referida multa.

DECIMO PRIMERO: Que, en subsidio la reclamante solicita que la multa sea declarada como mal tipificada.

Que dicha alegación también será descarta atendido que no se rindió prueba al respecto. Que, a mayor abundamiento el hecho infraccional constatado es no exhibir toda la documentación que deriva de las relaciones laborales necesarias para efectuar las labores de fiscalización, específicamente referido a los comprobantes de depósito o transferencias del pago de las remuneraciones. Que consta de la prueba aportada al juicio y de acuerdo a lo señalado en los escritos de discusión, que la comunidad exhibió las liquidaciones de sueldo de la trabajadora, las que por no venir firmadas, se le requirió complementar solicitándole exhibiera los comprobantes de depósito o transferencias del ítem asignación familiar, cuestión que no realizó, razón por la cual, también se rechazará dicha alegación, por no existir argumentos distintos a los que sustentan la petición principal y por las mismas consideraciones que han sido referidas en los acápites precedentes.

DECIMO SEGUNDO: Que, finalmente, la reclamante solicita en subsidio que la multa sea rebajada prudencialmente. Señala que su representada es una comunidad de pocos trabajadores, con un presupuesto bajísimo, a la cual se le impone una multa que es totalmente desproporcionada y que la legislación laboral regula las multas de acuerdo a la cantidad de trabajadores que tiene la empresa, encontrándose su representada en el rango más bajo con solo tres



trabajadores. Agrega que la multa carece de toda razonabilidad, que se le aplica dentro de la escala la multa más alta, al considerarse gravísima, lo cual no es razonable y es totalmente desproporcionada, siendo una Comunidad de Copropietarios que tiene solo tres trabajadores y que la multa se refiere a documentación de solo uno de ellos. Indica que su representada jamás ha sido multada con anterioridad por la inspección del trabajo, tiene una conducta anterior irreprochable y que jamás ha sido demandada por trabajador alguno.

Que, en relación a la cuantía de la multa, esta fue fijada en 26,73 IMM (\$7.064.258.-). Que, los artículos 505 bis y 506 del Código del Trabajo, establecen el monto de las multas por infracciones a la ley laboral, indicando la forma como deben aplicarse, disponiendo que los empleadores se clasificarán en micro, pequeña, mediana y gran empresa, ello en función del número de trabajadores. Así, por micro empresa se entiende aquella que tuviere contratados de 1 a 9 trabajadores; pequeña empresa aquella que tuviere contratados de 10 a 49 trabajadores; mediana empresa aquella que tuviere contratados de 50 a 199 trabajadores; y, gran empresa aquella que tuviere contratados 200 o más trabajadores.

Que, seguidamente la norma del artículo 506 del Código del Trabajo establece que las infracciones que no tengan señaladas una sanción especial, serán sancionadas según la gravedad de la infracción, y conforme a la siguiente escala: Para la micro empresa, la sanción ascenderá de 1 a 5 unidades tributarias mensuales; para la pequeña empresa, la sanción ascenderá de 1 a 10 unidades tributarias



mensuales; para la mediana empresa, la sanción será de 2 a 40 UTM; y, tratándose de grandes empresas, la sanción ascenderá de 3 a 60 UTM.

Que, en los presentes autos, la norma legal infringida de acuerdo a la resolución de multa referida, es la del artículo 31 en relación del artículo 32, ambos del D.F.L N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Que, el artículo 32, establece que “La infracción a las disposiciones del artículo precedente será sancionada con multa administrativa de tres sueldos vitales mensuales, escala A) del departamento de Santiago hasta diez sueldos vitales anuales del mismo departamento que será aplicada por el Inspector del Trabajo que la constató”.

Que, en el caso de autos, la reclamada no controvierte el número de trabajadores que indica mantener el condominio en su libelo, tampoco controvierte que jamás ha sido multada con anterioridad por la inspección del trabajo, o que no ha sido demandada por un trabajador previamente. Que, la reclamada señala en su contestación de la demanda, que la multa cursada “es conforme a la gravedad de la infracción, al número de trabajadores afectados de la muestra (100%)”. Que en el Informe de Exposición además se indica - al obtener el tipificador- que el tamaño de la empresa es micro, que el tamaño de trabajadores de la muestra es de 1, el que además es el afectado en la infracción y que la empresa no ha sido sancionada en los últimos 18 meses. De esta forma el órgano fiscalizador determina que la infracción es gravísima.



Que de acuerdo a todo lo señalado, a entender de este sentenciador la Inspección del Trabajo aplicó la sanción sin que en la Resolución impugnada se expresara detalladamente sobre las circunstancias que permitieron regular el rango y el monto de la sanción. En efecto, no existe referencia a los elementos fijados por la ley para tal efecto, desconociéndose los fundamentos del Servicio para fijar el monto de la multa, resultando por tanto un acto administrativo arbitrario y desproporcionado.

Que, por consiguiente, conforme a lo expuesto y atendido el número de trabajadores de la reclamante, se rebajará el monto de la multa, la que se regula en cinco unidades tributarias mensuales (5UTM).

DECIMO TERCERO: Que en cuanto a la petición de la parte reclamante de hacer efectivo el apercibimiento legal establecido en los artículos 454 N° 3 del Código del Trabajo por no comparecer el representante de la reclamada citado a absolver posiciones a la audiencia de juicio, es del caso señalar que esta es una facultad del Tribunal y atendido lo razonado en los motivos anteriores no se hará lugar al apercibimiento solicitado.

DECIMO CUARTO: Que, la prueba analizada lo ha sido en conformidad a las reglas de la sana crítica y el restante material probatorio en nada altera lo razonado precedentemente.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 425, 446, 453, 454, 459, 503, 506 del Código del Trabajo,



artículos 31 y 32 del DFL N°2 de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y demás normas pertinentes, se declara:

I.- Que **SE ACOGE PARCIALMENTE** el reclamo de autos, respecto de la Resolución de Multa N° 1528/23/3, de fecha 23 de enero el año 2023, declarándose que se rebaja la multa a 5 UTM. -

II. Que cada parte pagará sus costas. -

III. Atendida la discrepancia existente entre la fecha de notificación de la sentencia indicada en la audiencia de juicio y la fecha en que materialmente se incorpora la presente sentencia al sistema computacional, para todos los efectos legales, téngase por notificada en esta última, esto es el día 10 de agosto de 2023.

Remítase correo electrónico a las partes que lo han registrado en el proceso.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

RIT: I-115-2023.

RUC: 23-4-0464128-K

Dictada por don **FELIPE DANIEL GARCÍA RIFFO**, Juez Suplente del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

En Santiago a diez de agosto de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la sentencia precedente.



